



La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la transmisión al consultante de los datos contenidos en el expediente del proceso selectivo en el que el mismo participó, habiendo fundado su solicitud en lo dispuesto en los artículos 35 a) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) cuando exista una norma con rango de Ley que autorice la cesión de los datos.

Como se ha indicado, el consultante fundamenta su solicitud en lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, el primero de los cuales reconoce en su apartado a) el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

La condición de interesado en el procedimiento administrativo viene recogida en el artículo 31 de la citada Ley 30/1992, cuyo apartado 1 dispone que:

*“Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:*

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.*
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.*



*c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.”*

Pues bien, en el presente caso se indica en la consulta que la solicitud se refiere al expediente administrativo de un proceso selectivo en el que participó el consultante, ostentando obviamente en el mismo la condición de interesado, por lo que debe considerársele reconocido el derecho establecido en el artículo 35 a) de la Ley 30/1992.

De este modo, la previsión contenida en el citado precepto supone una excepción legal al consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de carácter personal, de modo que la cesión planteada en la consulta se encontraría amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

La condición de interesado en el procedimiento hace innecesario acudir al análisis del artículo 37 de la Ley 30/1992, que podría fundar la transmisión de los datos al amparo del derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros.

Por tanto, la cesión planteada en la consulta se encuentra amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 35 a) de la Ley 30/1992, al haber participado el consultante en el proceso selectivo a cuyo expediente se solicita el acceso.